

El representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos cree, sin embargo, que es clave lograr un cese el fuego.

A pesar de los ataques de la guerrilla y la caída del apoyo popular al proceso de paz, el representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, insiste en la oportunidad histórica de terminar con el conflicto armado.

En entrevista con este diario analizó otros problemas advertidos en el último informe de derechos humanos del organismo internacional.

El proceso de paz ha perdido apoyo social, según encuestas recientes. ¿Le preocupa esto a su oficina?

«No es fácil resolver 50 años de conflicto armado, hay desconfianzas mutuas y también en la sociedad. Hay críticas, pero el proceso es una oportunidad para transformar de manera trascendental a Colombia y de resolver las violaciones de derechos humanos y que el país no siga infelizmente como campeón de víctimas de minas antipersonal, desplazados forzados, reclutamiento ilegal de menores y otros problemas relacionados con el conflicto que impiden su progreso».

También persiste el debate nacional por dialogar sin cese el fuego, el reconocimiento de las Farc a sus víctimas...

«La experiencia nos ha demostrado que hay varios modelos de negociación de los conflictos y no es imposible resolverlos en medio de las hostilidades. El caso de Centroamérica es un ejemplo, como también hubo treguas en medio de diálogos de paz que no terminaron en nada. Pero nuestro punto de vista es que entre más rápido se concrete un cese el fuego mejor para evitar más víctimas y violaciones de derechos humanos».

¿Eso implica una dosis de justicia por sus crímenes?

«Desde la ONU hemos sido claros en que la justicia transicional y restaurativa es una herramienta útil para buscar reparaciones colectivas de víctimas, memoria histórica, acciones individuales y colectivas de reconciliación. Si se llega a un acuerdo de paz no necesariamente todos los miembros de la guerrilla van a ir a la cárcel. Pero está claro y reiteramos que no puede haber indultos ni amnistías».

Hay sectores que temen que tras una desmovilización surjan otros grupos ilegales como ocurrió con las autodefensas. ¿Lo cree así?

«Es un riesgo que no se puede desconocer. Por eso, es importante que la desmovilización sea total. Lo ocurrido con las Auc deja lecciones que se deben tener

«Aun sin tregua, es posible terminar este conflicto»

en cuenta para no repetir errores. De otro lado, se espera que la mayor disciplina interna que hasta ahora ha demostrado la guerrilla evite eso, pero es evidente que es necesario un plan de desmovilización bien estructurado».

Según el informe de derechos humanos que recién entregan, ¿cuáles son las alertas en Antioquia?

«En la zona urbana, como lo es Medellín, los combos delincuenciales representan una preocupación porque son los que provocan muchas violaciones a los derechos sociales, económicos y culturales, a través de asesinatos, desplazados, desaparecidos, extorsiones y amenazas a los defensores. En las áreas rurales las alertas pasan por la violencia de guerrillas y bandas criminales. También nos preocupa mucho el tema de restitución de tierras, por la seguridad de los desplazados que retornan».

¿Además de la seguridad de los reclamantes de tierras hay más amenazas?

«Este es un programa muy ambicioso porque más del 10 por ciento de los colombianos fue despojado de tierras. Advertimos riesgos para la vida y la seguridad de los desplazados que ya retornan o van a retornar porque muchos poseedores de esos predios tienen aún conexión con grupos ilegales.

Pero además existe un gran reto que es la sostenibilidad de esa población para garantizar que puedan volver productivas sus tierras y llevar una vida digna».

CLAVES

PRIMEROS RESULTADOS DE LA REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS

1. El conflicto armado ha provocado el desplazamiento forzado de cuatro millones de personas en Colombia.
2. La meta del actual Gobierno es la restitución de cerca de dos millones de hectáreas a los desplazados.
3. 157.840 víctimas fueron indemnizadas, en 2012, por el Gobierno con 912.522 millones de pesos y otros beneficios.

EN DEFINITIVAEl representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, no pierde la esperanza en que el actual proceso de paz logre terminar el conflicto.

«Aun sin tregua, es posible terminar este conflicto»

<http://m.elcolombiano.com/article/125941>